

**SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE  
SENADOR FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN**

**INFORME PREPARACIÓN DE CONTENIDOS Y ANTECEDENTES.**

“INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE LEY RELATIVOS A LOS  
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN  
CHILE: BOLETINES N° 15.776-17 Y 9.363-04.”

DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA –  
DERECHO INTERNACIONAL – LEGISLACIÓN COMPARADA.

FELIPE CRESPO AVENDAÑO.  
MAYO, 2025.  
SANTIAGO/VALPARAÍSO.

## **INTRODUCCIÓN**

La diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios representa un patrimonio invaluable que da cuenta de la riqueza histórica, simbólica y social de un país. En Chile, las lenguas de los pueblos indígenas han experimentado un proceso de deterioro. En respuesta a esta situación, los Boletines N° 15.776-17 y 9.363-04 buscan establecer un marco jurídico para la promoción, protección y garantía de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Este informe tiene por objeto ofrecer un análisis del trasfondo normativo, político y social que fundamenta las ideas detrás de estos proyectos de ley, contextualizando su pertinencia a la luz del derecho internacional, la legislación comparada y la realidad lingüística chilena. En esa línea, se ofrece también una reflexión sobre el rol estatal y las políticas públicas necesarias que surgen detrás de este tipo de debates. Se expondrán así los fundamentos, alcances y desafíos de los proyectos de ley contenidos en los Boletines N° 15.776-17 y 9.363-04, que promueven el reconocimiento, protección y garantía de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Este análisis no se limita a las etapas legislativas, sino que profundiza en los marcos jurídicos internacionales, en la legislación comparada, el estado actual de las lenguas indígenas en el país, como también los requerimientos institucionales para su implementación.

Se debe indicar también que el Boletín N° 9.363-04 fue presentado en 2014, mientras que el Boletín N° 15.776-17 se introdujo en 2023. Ambos proyectos fueron refundidos debido a su objetivo común de establecer una ley general que reconozca, proteja y garantice los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos originarios de Chile. Estos proyectos fueron impulsados por diversos parlamentarios y organizaciones indígenas, y está siendo discutido en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado. En julio de 2023, la comisión aprobó por unanimidad el proyecto refundido, destacando la importancia de reconocer las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural del país y la necesidad de implementar políticas públicas para su revitalización y uso oficial en los territorios donde se hablan

## **DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN CHILE**

Según el II Estudio de Caracterización de los Pueblos Indígenas en Chile (Ministerio de Desarrollo Social, 2017), sólo un 12,5% de las personas que se reconocen como indígenas declara hablar y comprender su lengua originaria. En muchos casos, se trata de hablantes pasivos, cuya competencia se reduce a vocabulario básico. La UNESCO ha clasificado varias lenguas originarias en Chile como “seriamente amenazadas” (como el mapudungun, quechua y aymara) o “en peligro crítico de extinción” (como son las yagán, kawésqar y ckunza).

Esta situación no es casual: responde a un largo proceso de desincentivo institucional y desuso de las mismas. La carencia de educación intercultural efectiva, en ciertos lugares, la escasa presencia de las lenguas originarias en las determinadas zonas del país con el uso limitado en

servicios públicos y el estigma social han contribuido a este escenario de regresión lingüística. El fenómeno de pérdida lingüística no sólo implica una erosión del lenguaje, sino también la disminución de las formas de conocimiento y expresión cultural propias de cada pueblo.

## MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

El marco internacional donde se encuentran los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas es amplio y vinculante, y más allá de la opinión respecto de cada uno de los instrumentos, se puede encontrar referencia en los siguientes documentos:

1. **Convenio N° 169 de la OIT:** Chile lo ratificó en 2008. Su artículo 28 señala que los pueblos indígenas deben tener la posibilidad de aprender a leer y escribir en su propia lengua y recibir educación en ella. Asimismo, establece que las autoridades deberán adoptar medidas para preservar y promover su desarrollo. Este convenio es de carácter vinculante y su aplicación en el derecho interno chileno ha sido ratificada por la jurisprudencia nacional.
2. **Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007):** Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a utilizar, revitalizar y enseñar sus lenguas y sistemas de escritura. En su artículo 13 se consagra que los Estados deberán adoptar medidas eficaces para garantizar este derecho, y que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios sistemas educativos y medios de comunicación en su lengua.
3. **Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016):** Dispone en su artículo XIII que los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, usar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales y toponimias. Esta declaración refuerza el marco regional de derechos humanos en América.
4. **Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):** El ODS 4 (educación inclusiva y de calidad) llama a reconocer y respetar la diversidad cultural y lingüística. La meta 4.7 en particular enfatiza la importancia de promover la ciudadanía mundial y la valorización de la diversidad cultural.

## FUNDAMENTO DE LOS PROYECTOS DE LEY (Boletines 15.776-17 y 9.363-04)

Ambos proyectos tienen un propósito común: establecer un régimen jurídico que reconozca y garantice los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en el marco del Estado de Chile. En particular, el Boletín 15.776-17 establece una Ley General sobre Derechos Lingüísticos Indígenas. Entre sus principios rectores se incluyen:

- Reconocimiento del carácter oficial de las lenguas indígenas en sus territorios.
- Igualdad de derechos entre las lenguas originarias y el castellano.
- Promoción de la educación intercultural bilingüe.

- Derecho a usar la lengua originaria en procedimientos administrativos y judiciales.
- Obligación estatal de promover, revitalizar y proteger estas lenguas.

Se contempla además la creación de un “Instituto Nacional de Lenguas Indígenas”, encargado de coordinar políticas públicas en la materia, formar recursos humanos y desarrollar estudios lingüísticos y pedagógicos. La ley también prevé la producción de material educativo y la incorporación de las lenguas originarias en señalética, medios de comunicación y servicios públicos. Adicionalmente, se propone la formación de intérpretes y mediadores lingüísticos, así como un sistema de certificación de competencias lingüísticas indígenas.

## LEGISLACIÓN COMPARADA

La experiencia comparada demuestra que en distintos países, sobre todo de la región, pero no exclusivamente, se han establecido regímenes jurídicos robustos para la promoción de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, integrando sus lenguas como parte del quehacer estatal.

A continuación, se describen algunos modelos relevantes:

1. **México:** La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales con la misma validez que el español. La norma crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), organismo público encargado de diseñar políticas lingüísticas, apoyar la estandarización, fomentar la educación intercultural bilingüe y asesorar a los tres niveles de gobierno. Esta ley permite el uso de las lenguas indígenas en la administración de justicia, servicios de salud y educación.
2. **Bolivia:** La Constitución Política del Estado de 2009 declara a Bolivia como un Estado plurinacional, reconociendo 36 lenguas indígenas como oficiales, junto al castellano. La Ley N° 269 de Derechos y Políticas Lingüísticas (2012) establece la obligatoriedad del uso de lenguas indígenas en la administración pública. La educación intercultural bilingüe es obligatoria y la formación de maestros indígenas se realiza en institutos especializados (ESFM). Asimismo, se exige que los funcionarios públicos acrediten conocimientos básicos de una lengua originaria.
3. **Perú:** Mediante la Ley N° 29735, se reconoce y promueve el uso, preservación y recuperación de las lenguas originarias. Se creó la Dirección de Lenguas Indígenas dentro del Ministerio de Cultura, que lidera la implementación de políticas lingüísticas. En regiones con mayoría indígena, el Estado tiene la obligación de brindar servicios públicos en la lengua predominante. Existen programas de alfabetización y traducción de textos oficiales a las lenguas originarias, además de un Registro Nacional de Lenguas Originarias.
4. **Canadá:** En 2019, el Parlamento aprobó la “Indigenous Languages Act”, que reconoce la importancia de preservar y revitalizar las lenguas indígenas como parte del patrimonio

nacional. Se creó un Comisionado de Lenguas Indígenas con facultades de monitoreo y promoción. Esta ley fue el resultado de procesos de consulta con los pueblos originarios y de la necesidad de reparar los efectos del sistema de internados forzados, donde se prohibió el uso de lenguas nativas.

5. **Nueva Zelanda:** La “Māori Language Act” de 1987 convirtió al maorí en lengua oficial. Se creó la Comisión de la Lengua Maorí (Te Taura Whiri i te Reo Māori), encargada de estandarizar el idioma, fomentar su uso en educación, medios de comunicación y servicios públicos. Existe una política estatal activa de revitalización lingüística que ha resultado en el crecimiento del número de hablantes y en la inclusión del idioma en las escuelas y universidades.
6. **Paraguay:** Desde la Constitución de 1992, el guaraní es reconocido como lengua oficial junto con el español. La Ley de Lenguas de 2010 creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas y establece el derecho de los ciudadanos a recibir educación y atención estatal en guaraní. Las campañas públicas y documentos oficiales están traducidos en ambas lenguas.
7. **Noruega, Suecia y Finlandia:** En estos países escandinavos, se reconoce el derecho de los pueblos sámi a usar su lengua en los servicios públicos, incluyendo escuelas, hospitales y juzgados. Se han creado parlamentos sámi con competencias en temas culturales y lingüísticos, y los medios de comunicación estatales disponen de contenidos regulares en las lenguas sámi.

En todos estos casos se observa que los avances más sustantivos en materia de derechos lingüísticos se dan cuando existe una combinación de voluntad política, institucionalidad especializada, financiamiento sostenido y participación activa de los pueblos originarios. Estos modelos ofrecen elementos útiles para adaptar el proyecto chileno a estándares internacionales de protección y revitalización lingüística.

## **ROL DEL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

La implementación efectiva de los derechos lingüísticos no puede depender exclusivamente de medidas simbólicas o de reconocimiento legal. A través de la institucionalidad, se debe desarrollar políticas activas, presupuestos adecuados y justos, con los adecuados mecanismos de participación.

1. **Planificación lingüística:** Se pueden adoptar políticas orientada a la revitalización de las lenguas indígenas, con metas anuales, marcos de acción territoriales y reportes públicos de cumplimiento. Esta planificación debe tener rango normativo y carácter vinculante o recomendaciones aplicables para las instituciones públicas.
2. **Administración pública multilingüe:** Se debe asegurar que los servicios públicos — especialmente en salud, justicia, educación y desarrollo social— estén capacitados y dotados de personal que hable lenguas indígenas en las zonas donde estas se usan.

3. **Educación intercultural y formación docente:** Pese a que ya existen esfuerzos en la materia, las universidades e institutos profesionales debieran incorporar en sus mallas curriculares programas de enseñanza de lenguas indígenas y formación de educadores bilingües. Se debe fortalecer la educación intercultural desde el nivel preescolar hasta la educación superior, incluyendo becas o incentivos para estudiantes hablantes de lenguas originarias.
4. **Participación de las comunidades:** La gestión de las políticas lingüísticas debe realizarse en colaboración con los pueblos indígenas. Se debe respetar la autonomía cultural de las comunidades, incorporarlas en la toma de decisiones y garantizar que los procesos normativos cuenten con consulta previa, libre e informada.
5. **Campañas de sensibilización:** Es imprescindible fomentar una cultura de respeto y valoración hacia la diversidad lingüística. Las campañas educativas y comunicacionales deben explicar la importancia del plurilingüismo y combatir los prejuicios asociados al uso de lenguas indígenas.

## **CONCLUSIONES**

1. Los proyectos de ley representados por los Boletines N° 15.776-17 y 9.363-04 son una respuesta legislativa adecuada y urgente a la situación de desplazamiento y riesgo de extinción de las lenguas indígenas en Chile.
2. Su fundamento jurídico se encuentra ampliamente respaldado por normas internacionales de derechos humanos, como son el Convenio N° 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
3. La experiencia comparada demuestra que los Estados que han avanzado en el reconocimiento de derechos lingüísticos lo han hecho mediante marcos legales ambiciosos, órganos técnicos especializados y un financiamiento adecuado.
4. En Chile, la implementación de estos derechos requerirá de algunas modificaciones de la institucionalidad pública, especialmente en áreas como educación, justicia, salud y comunicaciones, además de una estrategia nacional que considere la diversidad territorial y cultural.
5. Se hace indispensable la participación activa de las comunidades indígenas en la formulación, ejecución y fiscalización de las políticas lingüísticas.
6. La promoción de las lenguas indígenas contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2024). Ficha del Proyecto de Ley Boletín N° 15.776-17.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2024). Ficha del Proyecto de Ley Boletín N° 9.363-04.
- Organización Internacional del Trabajo (1989). Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales.
- Naciones Unidas (2007). Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Organización de Estados Americanos (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- UNESCO (2010). Atlas de las lenguas del mundo en peligro.
- Ministerio de Desarrollo Social (2017). II Estudio de Caracterización de los Pueblos Indígenas.
- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. México, Diario Oficial, 2003.
- Ley N° 269 de Derechos y Políticas Lingüísticas. Bolivia, Gaceta Oficial del Estado Plurinacional, 2012.
- Ley N° 29735 de Lenguas Originarias. Perú, Diario Oficial El Peruano, 2011.
- Indigenous Languages Act. Gobierno de Canadá, 2019.
- Māori Language Act. Nueva Zelanda, 1987.
- Ley de Lenguas N° 4251. Paraguay, Diario Oficial, 2010.
- Convenios internacionales ratificados por Chile disponibles en: <https://www.bcn.cl/leychile>
- CIDH (2019). Derechos culturales y pueblos indígenas en América Latina.